

Doc.:

Exp: **A/SER-017247/2020 (C-322B/003-20)**

INFORME SOBRE LA NO PROCEDENCIA DE SUBCONTRATAR LA "ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA, ESCOLARIZADOS EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA".

El artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, establece que "el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, con sujeción a lo que dispongan los pliegos..."

El objeto del presente contrato es la contratación de un servicio educativo que consistirá en la interpretación de lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad auditiva que se encuentre cursando estudios, sostenidos con fondos públicos, de las enseñanzas competencia de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial según el Decreto 288/2019, en centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y Juventud.

Precisamente se le ha considerado como un servicio integral, porque las actividades a desarrollar son únicas e indivisibles, no siendo lógico que se desintegre las mismas para ser prestadas por partes: el número de horas de interpretación a cubrir se van redistribuyendo entre los diferentes niveles educativos dentro de un mismo centro o entre diferentes centros, en función de las necesidades demandadas por los mismos. Por ello la redistribución de horas solo es posible si el servicio es prestado por una sola empresa que, dentro de un mismo centro, pueda atender a alumnos de diferentes niveles educativos o, en algunos casos, pueda atender un mismo profesional a más de un centro si el horario así lo permite.

El servicio de interpretación debe considerarse pues, como único y global, no siendo aconsejable que parte del mismo sea prestado por una empresa y otra parte por otra distinta, ya que se podría correr el riesgo de que una falta de coordinación redunde en perjuicio del servicio.



De hecho, encomendar la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, mediante la prestación del servicio por parte de intérpretes de lengua de signos española a una empresa externa al personal del centro, ya supone una excepcionalidad en el mismo, por lo que se entiende conveniente no fraccionar más la realización de la misma mediante la subcontratación de parte del contrato.

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

José Ma Rodríguez Jiménez

